

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. Victoriano Olivera, contra la determinacion de la Corte de Justicia de ese Estado, por la cual se le manda arreglar y entregar el archivo del Juzgado 2º de la capital.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que el recurso de amparo promovido por el C. Victoriano Olivera contra la resolucion de la Corte de Justicia del Estado, que le impone la obligacion de arreglar y entregar el archivo del Juzgado 2º que tuvo á su cargo, como alcalde constitucional desempeñando las funciones de juez en 1ª instancia por ministerio de la ley, exige la previa discusion y solucion de las cuestiones siguientes:

Primera. Si la Corte de Justicia compuesta de los ministros de las dos salas, tuvo alguna facultad para imponer al quejoso la obligacion expresada en la forma en que lo hizo.

Segunda. Si en el supuesto de que haya carecido de autoridad para ello, cabe el recurso de amparo para nulificar su determinacion, aun siendo esta dictada por autoridad judicial.

El oficio fiscal de la Corte, cuyo dictamen se transcribió al Juzgado por la misma Corte por vía de informe, desentendiéndose de la primera cuestion, que es la principal y sin cuya previa solucion es del todo inútil la segunda, entra en el fondo de la que la Corte resolvió, con jurisdiccion ó sin ella, en contra del quejoso: esto es, se empeña en probar que conforme á la legislacion del Estado, Olivera tiene el deber de arreglar el archivo del Juzgado 2º y de entregarlo. Ciertamente, esta materia nada tiene que ver con el recurso de amparo, así porque Olivera no funda en ella su queja, como porque la garantía á que se refiere el artículo 14 de la Constitucion, cuya violacion reclama Olivera, no es relativa á la Jus-

ticia intrínseca de los fallos judiciales, sino á las fórmulas y autoridad con que se decide un pleito de interes privado. Bien puede una sentencia decidir un pleito con la mas dura razon y justicia, y sin embargo ser injusta civilmente hablando, por la omision de fórmulas ó falta de jurisdiccion en los jueces, y en tal caso *procede el recurso de amparo*. Nada importa, pues, que conforme á las leyes del Estado tenga ó no Olivera obligacion de arreglar y entregar el archivo de que se trata, si la declaracion de ese deber se ha hecho sin jurisdiccion ó sin las fórmulas legales, porque entonces ha lugar al recurso, supuesta la solucion del punto segundo de que se ocupará este ministerio despues.

¿Que autoridad, pues, tenia la Corte para declarar que Olivera tenia el deber de hacer el arreglo y la entrega del archivo mencionado? Esta es la verdadera dificultad.

Con sola la vista de la Constitucion del Estado no puede salirse de la duda, porque sus artículos 77 y 78 que tratan las facultades de la Corte las fijan de una manera general, como era conveniente que fuese, pero como el segundo de dichos artículos determinó que las ejerciese segun lo dispusiera la ley que debía organizar los tribunales del Estado, la resolucion se debe buscar en la ley de 13 de Setiembre de 1858, que fué expedida en virtud del art. constitucional, y segun la que está organizada la administracion de Justicia en el Estado.

El art. 49 de dicha ley fija las atribuciones de la Corte plena, y entre las que designa en las nueve fracciones en que está dividido, no halla el que suscribe la que se necesitaba para declarar la obligacion que se cree tiene Olivera de arreglar y entregar el archivo. Tiene la Corte plena facultad para decidir los recursos de fuerza (ahora no tiene objeto), para sentenciar las causas de responsabilidad formadas contra los altos funciona-

rios, en cuyo número no cuenta la ley á los alcaldes ni á los jueces de 1.^a instancia; para proponer las dudas de ley y sus reformas al cuerpo legislativo; para examinar á los que soliciten ser abogados; para conocer de los negocios económicos del Tribunal; para remover y nombrar los empleados de su secretaría; para practicar visitas de cárceles; para cuidar del buen manejo y aseo de ellas, y para formar su reglamento interior.

En todas estas atribuciones no puede señalarse una que la Corte haya podido ejercer para condenar á Olivera al arreglo y entrega del archivo. La quinta de dichas atribuciones pudo ejercerla válida y legítimamente para procurar el orden económico del Juzgado cuyo archivo está en cuestión; pero desde el momento en que hubo contradicción de parte, y desde que fué evidente la necesidad de una sentencia condenatoria ó absolutoria, el punto dejó de ser puramente económico y adquirió la naturaleza de contencioso, que según el citado art. no estaba en la esfera de las atribuciones de la Corte plena conocer, porque son muy marcados por el mismo art. en los párrafos 1.^o y 2.^o los únicos asuntos contenciosos de que la Constitución ha querido que conociese.

El quejoso Olivera ha tenido razón en fundar su queja, diciendo que desde que él contradijo la obligación que se trataba de imponerle, no era la Corte plena, sino la sala á que tocaba en turno, la que debía oírlo y sentenciarlo. Son, en efecto, las salas las llamadas á decidir en 1.^a 2.^a ó 3.^a instancia los pleitos civiles ó criminales, ya comunes ó ya por responsabilidades oficiales; y sobre el particular son clarísimos los términos de los artículos 54, 55, 56 y 57 de la misma ley de 13 de Setiembre para que el infrascrito abuse de la benevolencia del Juzgado extratándolos en este informe; de manera que á su juicio es una verdad incontrovertible que la Corte conoció de un asunto

que no le competía bajo ningún aspecto desde que perdió su carácter económico. Si cuando el quejoso pidió la consignación á la sala á que tocaba en turno el acuerdo, hubiese accedido la Corte como era regular, el mal se habría reparado; pero cuando en vez de ello se mandó estar á lo mandado sin ningún recurso, fué dar á una resolución que no podía ser sino una providencia económica, el carácter de una sentencia ejecutoriada, pronunciada en un juicio contradictorio, lo que evidentemente no podía hacer la citada corporación, porque eso equivalía á haber condenado á Olivera sin autoridad y sin formas, y además haberlo privado hasta del recurso de apelación ó súplica que conforme á las leyes no se niega á nadie.

Resulta de lo dicho que el C. Olivera ha sido juzgado por un Tribunal no solo incompetente, sino que carece absolutamente de facultad para administrar justicia, y que por consiguiente ha sido violada en su persona la garantía constitucional del art. 14 que consiste en no ser juzgado sino por Tribunal establecido por la ley.

La segunda cuestión sobre si contra tales procedimientos tiene ó no lugar el recurso de amparo, supuesto que hayan sido ejercidos por el poder judicial del Estado, es lo que vamos á examinar.

El oficio fiscal de la Corte sostiene la negativa, fundado en el art. 8.^o de la ley de 20 de Enero de 1869, porque dice que los actos de las salas de la Corte, separada ó colectivamente tomadas, son funciones judiciales.

Acerca de esta confusión de ideas que se nota á primera vista, tendrá el que suscribe ocasión de tratar el segundo aspecto del asunto que se cuestiona; y por ahora solo hará notar que ha sido cuestión muy debatida y objeto de opiniones muy variadas entre los mas célebres jurisconsultos de la Nación, la oposición del citado art. 101 de la Consti-

tucion Federal, que no pone límite alguno al recurso mencionado, como lo pone el artículo de la ley de 20 de Enero.

Apénas se publicó dicha ley y los redactores del "Derecho" publicaron un lógico y razonado artículo que prueba hasta la evidencia que el citado art. 8º es anticonstitucional y que no debe ser aplicado en la práctica, y el autor de la coleccion de leyes intitulada "Nuevo Código de la Reforma" que sigue la misma opinion que el articulista del Derecho, refiere la conducta de la Suprema Corte en esta materia, que contra la prohibicion del art. 8º revocó la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de Sinaloa, que fundado en la misma disposicion habia negado el amparo en un negocio judicial, cuya revocacion dió lugar á una acusacion contra los ministros que la firmaron, presentada á la Cámara y que no ha sido resuelta hasta ahora. En medio del conflicto de los primeros funcionarios de la Nacion, algunos escritores, tales como el Sr. Castillo Velasco en sus "Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional," han procurado conciliar la letra y espíritu de la Constitucion con el artículo de la ley de 20 de Enero, proponiendo interpretaciones mas ó menos ingeniosas, que sin embargo han dejado en pie la dificultad.

El que suscribe entiende que supuesto que la facultad de aplicar las disposiciones constitucionales en los casos prácticos y particulares que ocurran es del poder judicial, debe estarse á la norma que ha seguido la Suprema Corte, mientras la autoridad competente no declare el modo de conciliar la amplitud constitucional con la restriccion del art. 8º de la ley de 20 de Enero: esto es, no debe negarse el amparo por la sola circunstancia de referirse á actos judiciales.

Sin embargo, respetando como es de-

bido las luces de los eminentes juriscónsultos que han tratado la materia, cree el infrascrito que el artículo constitucional se refiere á la vez al derecho de introducir el recurso y tambien al de obtener el amparo en los casos en que procede, aun cuando se trate de actos judiciales, y que el art. 8º solo se refiere al derecho de obtenerlo, el cual se debe declarar sin lugar cuando los actos judiciales lo han tenido sin violacion de las garantías constitucionales. Se trata, por ejemplo, del recurso contra una sentencia pronunciada por un juez competente, mediante los trámites sustanciales de los juicios: en tal caso, segun la Constitucion, el recurso debe tener entrada por improcedente que sea, en virtud de que ni aun la misma Constitucion podrá privar á nadie del derecho de ser oido y sentenciado conforme á derecho; pero llegando á la sentencia, el amparo debe negarse conforme á la Constitucion, supuesta la falta de la violacion de las garantías; y á esta negacion es á la que se refiere tal vez el art. 8º de la citada ley de Enero, porque se trata de un acto judicial propiamente dicho.

Si, por el contrario, la sentencia fuera pronunciada por un gobernador, el recurso procedia tanto para darle entrada como para obtener el amparo, así conforme á la Constitucion como á la ley de 20 de Enero; y la razon seria que tal sentencia no era un acto judicial propiamente dicho, sino un abuso y una usurpacion apoyada en la fuerza. Si la repetida ley de Enero tuvo el objeto de que se negase en este caso ó otro semejante el amparo, es indudablemente anticonstitucional, y por lo mismo inaplicable en la resolucion de los negocios por el poder judicial, en cumplimiento del art. 126 de la Constitucion Federal.

Se ha extendido el infrascrito en las precedentes consideraciones para demostrar que no se puede sostener tan

magistralmente como lo hace el oficio fiscal de la Corte, que el amparo no tiene lugar respecto de actos judiciales de un modo tan absoluto; por lo que, y supuesto que hay razones mas convincentes de lo contrario, tratándose de la defensa respecto de un poder superior, la equidad exige que no se abandone á un particular que se encuentra verdaderamente oprimido, entregado á sus propios recursos para salvarse de su opresion.

En verdad, no era necesario entrar en la cuestion emergente del art. 8º citado, que solo puede referirse á actos judiciales propiamente dichos; y por consiguiente, cuanto se diga relativamente á esa cuestion, nada tiene que pueda aplicarse á los actos ejercidos por la Corte plena contra el O. Olivera. Se podría poner en duda la procedencia del recurso, si alguna de las salas hubiese condenado á Olivera al arreglo y entrega del archivo sin haber observado las fórmulas legales, porque al fin una ó otra sala tienen jurisdiccion y sus actos no pueden ser mas que judiciales, formales ó informales; pero á la Corte plena no le da la Constitucion ni las leyes secundarias jurisdiccion alguna en materias contenciosas como la presente, y aunque observe las fórmulas legales, sus actos sobre el particular no pueden adquirir el carácter judicial, á menos que se hiciera prevalecer el absurdo que asienta el Fiscal de la Corte, de que la jurisdiccion ó la facultad de ejercer actos judiciales está concedida á las salas *separada y colectivamente tomadas*.

A propósito de esta consideracion, es oportuno citar la sentencia que pronunció el juez de Distrito de Tlaxcala en 19 de Marzo de 1869, en el recurso de amparo promovido por D. Tomás Guevara y D. Felipe Mendoza, contra la providencia del Ministro de la Guerra que los habia mandado pasar por las armas con sola la identificacion de sus

personas. Dicha-sentencia es muy conducente en el caso de que se trata, porque se versan en ella actos de una autoridad extraña, lo mismo que sucede aquí. No podría el infrascrito explicarse mejor, y con la misma solidez con que lo hace el juez que la redactó. Se encuentra en el núm. 16, tomo 2º del "Derecho."

Fundado en todo lo expuesto, y especialmente en los artículos 101 y 126 de la Constitucion general de la República, y en el 28 de la ley de 20 de Enero de 1869; este Ministerio pide á vd. que en definitiva se sirva declarar que la Justicia Federal ampara y protege al O. Victoriano Olivera, ex-juez 2º de esta capital, contra la declaracion que en Corte plena hizo el Superior Tribunal de Justicia del Estado, condenándolo á arreglar y entregar el archivo del Juzgado que fué á su cargo, en virtud de que tal declaracion ha violado la garantía otorgada por el art. 14 del pacto fundamental de la Nacion. Oaxaca, Setiembre 24 de 1872.

Es copia del original que obra en el juicio respectivo á que me remito.—Oaxaca, Setiembre 24 de 1872.—*José María Ballesteros.*

SENTENCIA del O. Juez de Distrito.

Oaxaca, Setiembre 30 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el O. Victoriano Olivera de esta vecindad, por creer haberse violado en su contra la garantía del art. 14 de la ley fundamental de la República, que previene que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad y exactamente aplicadas al hecho de que se trate, por tribunal que haya establecido previamente la ley: Visto que el mismo Olivera se queja de que la Corte de Justicia de este

Estado, no permitiendo que se le juzgue así, mandó por simple providencia y en acuerdo económico, que por haber estado encargado en otro tiempo del Juzgado 2º de esta capital como alcalde y por ministerio de la ley, debía formar inventarios del archivo, no obstante que en la parte no corriente, nunca le hizo entrega formal su antecesor, sino que abandonó ese archivo en desorden; y que se queja también de que pidiendo la audiencia, defensa y juicio en la sala respectiva, juez de la responsabilidad oficial de los jueces inferiores, todo se le denegó por otra providencia simple de la misma Corte de Justicia, constituida también en acuerdo económico; que la dicha Corte informa (fs. 5 y 6), que todo fué en efecto así; pero que así debía ser, porque así lo fundan los artículos 4º, 7º y 8º del decreto de 26 de Junio de 1844 (Legislación del Estado), y que no es de admitirse el recurso de amparo en negocios judiciales según el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869 (Legislación Federal), porque sufriría lesión la soberanía del Estado en su poder judicial, y porque es judicial todo lo que se ejecute por el *poder respectivo colectivo ó distributivamente*, sin que las infracciones de la ley en que incurra, puedan repararse por los tribunales federales, sino solo por los de los Estados; visto asimismo que el Promotor Fiscal de la Federación objeta: que no se trata de que juzgue la Justicia Federal, sino los jueces del Estado tienen aquellos deberes, ni de si el precepto de la Corte es justo en sí mismo, con relación á Olivera y en el caso, sino de si la declaración ha sido pronunciada por autoridad competente y en la forma legal; que respecto de esto según los artículos 77 y 78 de la Constitución del Estado en relación con la ley orgánica de sus tribunales, art. 49 de la de 13 de Setiembre de 1858, la Corte plena no es juez en el caso, sino de los altos funcionarios, y

por lo demás un cuerpo económico, extraño en calidad de Corte plena á los negocios judiciales: que debe abstenerse de llevar adelante sus acuerdos económicos desde que se hacen contenciosos, tratándose de la responsabilidad oficial de los jueces, que lo son de actos en casos de esa responsabilidad, las salas respectivas por su orden, según los artículos 54, 55, 56 y 57 de la misma ley orgánica; que entonces Olivera fué juzgado en efecto, contra el tenor del art. 14 de la Constitución Federal; que respecto de no proceder el recurso de amparo en negocios judiciales, no es cierto que la Corte de Justicia sea en todo caso, reunidas las salas ó colectivamente, el poder judicial del Estado ó una corporación que siempre debe obrar en el orden judicial sin otras facultades económicas, y que en eso hay una confusión de ideas manifiesta: que el art. 101 de la Constitución general, aunque diga lo contrario la ley de 20 de Enero de 1869, no pone el límite de lo judicial al recurso de amparo; que la ley última por eso, es anticonstitucional; y que en consecuencia la Corte Suprema de Justicia de la Federación no se ha detenido ante ese límite, sino extendiéndose á todo lo que permite y manda la Constitución; que esta cuestión ni tiene lugar no tratándose de las salas de la Corte, ni de la misma constituida en Tribunal pleno, sino en acuerdo pleno económico; y en fin, que Olivera expone además, que no todo lo que se hace por uno que es juez deba reputarse por eso, negocio judicial, aun faltando las formalidades de las leyes, fundándose en Escriche que dice: "Judicial lo que pertenece al juicio ó á la Administración de Justicia; y lo que se hace en justicia ó por autoridad de justicia," que los trámites regulares de los juicios y en el procedimiento judicial se contienen recursos de recusación dentro de cada instancia, y de apelación, súplica y nulidad, para proceder á otras,

y respecto de los acuerdos plenos económicos de la Corte de Justicia, no hay esos recursos, que con error supone en el caso el C. Fiscal de la Corte para poder alegar el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 69; que ni sería útil el recurso de responsabilidad para precaver el mal, como el de amparo, sino solo para remediarlo despues de sufrido; por último, cuanto mas ver convino. Considerándose: que las prescripciones relativas á deberes de los jueces no satisfacen á las exigencias importantes de la garantía y prescripción del art. 14 de la Constitución general, sobre formas de los juicios y jurisdicción competente para conocer y sentenciar, así en las causas de responsabilidad oficial de los jueces, como en la de los demas ciudadanos; que así como no se trata de esos deberes, menos se trata de extracción de documentos oficiales, expedientes, leyes, ó decretos de archivo público, ni de la multa por falta de formación de inventarios, sino antes bien de la responsabilidad oficial, fuera de la multa, responsabilidad que, la ley de 26 de Junio de 1844 no manda declarar gubernativa ó económicamente, como la multa, resultando bajo un aspecto extraños y bajo otro contraproducentes los artículos citados de esa ley, para el efecto de haberse podido constituir la Corte plena en juez de las responsabilidades oficiales de los jueces inferiores, contra lo dispuesto expresamente por la ley relativa de 27 de Abril de 1858, art. 108 (Legislación tambien del Estado): que de una manera evidente solo es dicha Corte constituida así, en pleno Tribunal juez de los altos funcionarios, segun la Constitución del Estado, artículos 77 y 78, y la ley orgánica de 13 de Setiembre de 858, art. 49, así como cuerpo consultivo sobre dudas ó reforma de leyes, corporación establecida para admitir á exámen de abogados, practicar esos exámenes y calificar, poder admi-

nistrativo para nombrar y remover á los empleados de su Secretaría, y autoridad política ó policía superior para remediar por visitas de comisión ó por sí misma los desórdenes y excesos que se cometen en las cárceles: que las salas solo separada y no colectivamente constituye el poder judicial del Estado, salvo el único caso de reunirse en Corte plena, para juzgar solo de la pena á los altos funcionarios, declarados culpables por la Legislatura, caso en que la Corte tiene solo el oficio de Jurado de sentencia; que por lo mismo no se trata de negocio judicial, sino de que judicialmente deba tratarse con arreglo á las leyes y por juez competente anterior al hecho de la responsabilidad que pueda tener Olivera y que se trató en acuerdo económico, sin guardar las formalidades de los juicios y sin jurisdicción competente colectiva de las salas, Tribunal posterior al hecho en que la Corte dice que debe constituirse para hacer efectivas las responsabilidades de los jueces, relativas á falta de inventarios. Considerándose ademas lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, lo que la ley de 20 de Enero de 1869 dispone, en cuanto no es contraria á los dichos artículos de la Constitución y estos otra vez en cuanto sean necesarios para amparar contra providencias de jueces aun cuando no estén constituidos en Tribunal, y segun han sido entendidos por la Suprema Corte de Justicia de la nación, conforme con la doctrina constitucional de los redactores del "Derecho," y del Colector del nuevo Código de la Reforma, y con fundamento de dichos artículos, mas el 126 de la Constitución general de la República y el 28 de la ley de 20 de Enero de 1869. La Justicia Federal ampara y protege al C. Victoriano Olivera, contra la providencia económica de la Corte de Justicia del Estado, de 26 de Marzo último que lo declaró responsable de la forma-

ción de inventarios y entrega formal del Juzgado 2º que fué á su cargo, así como contra su correlativa que le mandó se estuviera á lo acordado, por haberse violado en ambas providencias la garantía otorgada por el art. 14 del Pacto fundamental de la Nación; absteniéndose este Juzgado de calificar y decidir de lo demás de esas providencias relativas á expedientes que se hubieren extraviado, por no incumbirle. Hágase saber; expídanse los testimonios respectivos para los efectos legales, y dése cuenta con estos autos para su revisión á la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El C. juez 1º suplente de Distrito definitivamente Juzgando así lo sentenció mandó y firmó. Doy fé.—*José M. Monterrubio.*—*Rodolfo Sandoval*, secretario.—En la fecha, enterado del fallo anterior el C. Victoriano Olivera, firmó. Doy fé.—*Victoriano Olivera.*—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

En seguida, presente en su casa el C. Promotor fiscal le hice saber la sentencia anterior, de la que enterado dijo: que está conforme y que exhibe la copia de su último pedimento en cumplimiento de lo prevenido en el decreto general de 8 de Diciembre de 1870, y firmó. Doy fé.—*José María Ballesteros.*—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo promovido por el C. Victoriano Olivera, de esta vecindad, contra una providencia de la Corte de Justicia de este Estado.

Oaxaca, Octubre 3 de 1872.—*José M. Monterrubio.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 29 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por D. Victoriano Olivera, contra la Corte de

Justicia de ese Estado que en Tribunal pleno acordó que el quejoso entregara por inventario el archivo del Juzgado 2º de la capital, cuyo Juzgado sirvió como alcalde constitucional, y con cuyo acuerdo cree Olivera que se ataca la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitución Federal en la parte que dispone: que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley: Considerando: que el acuerdo de que se trata es un acto económico del Tribunal pleno de la Corte de Justicia de Oaxaca, que no importa un juicio ni una sentencia, y por lo mismo que no ataca la garantía referida, se decreta: Que se revoca la sentencia pronunciada el 30 del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Oaxaca, que ampara al quejoso, y que en consecuencia la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Victoriano Olivera, contra la providencia económica de la Corte de Justicia del Estado, que dispone que dicho Olivera entregue por inventario el archivo del Juzgado 2º de la capital, que estuvo á su cargo.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 5 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.